Objeción de conciencia en asuntos militares en el marco de la seguridad de paz

NÉSTOR MALDONADO GÓMEZ

La evolución del concepto de seguridad y paz

En el marco de los conflictos desencadenados en la historia de la humanidad, condicionados principalmente por la disputa del poder con manifestaciones económicas, políticas y culturales, se ha desarrollado la importancia de dos conceptos que han marcado los derroteros para determinar los desafíos de los territorios en controversia: seguridad y paz.

Para la comprensión profunda del término seguridad se debe partir de las fuentes teóricas que han dado relevancia a este concepto desde una visión política. De acuerdo con una concepción tradicional, el Estado es quien asume la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, pero este solo puede brindarla cuando la propia seguridad del Estado se encuentra garantizada; esto es lo que se conoce como Seguridad Nacional (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011). Desde esta visión clásica, se recalca de manera indirecta un deber de la ciudadanía en el que se marca la seguridad del Estado como un interés general que sobrepasa el interés particular que recae en el ciudadano, esto implica un compromiso por mantener la seguridad del país desde un mandato constitucional.

No obstante, la seguridad vista desde un ejercicio realista implica la lectura de los conflictos internacionales, en los cuales el control de los territorios, la disputa por la tierra y las sistemáticas controversias que afectan la soberanía territorial hacen del elemento seguridad el principio preponderante para la estructura de defensa integrada por la institución militar. De manera que, los Estados depositan en el poder militar la suficiente confianza para respaldar los intereses de los países en una política mundial, donde se defienden los intereses nacionales (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011).

Cabe resaltar el contexto histórico en que surge la Doctrina de Seguridad Nacional, teniendo en cuenta la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Guerra Fría, lo cual genera inquietudes sobre los países con base en una estructura militar consolidada que podría responder en acción de defensa de los intereses económicos y políticos. En este sentido, la seguridad nacional ha prevalecido de manera marcada en países donde se ha profundizado el conflicto armado, haciendo de este elemento una necesidad preponderante para la estabilidad de los países, funcionando paralelamente como un agudizador de violencia sobre los territorios. Como lo dispone Luttecke:

[...] el auge que adquirió la seguridad nacional que comenzó a ser empleada como justificación para el desarrollo de determinadas acciones, desde la construcción de una autopista hasta la concesión de becas para estudios científicos y tecnológicos. También se le empleó en sentido negativo, es decir, para proteger determinada información, impedir el ingreso de ciertas personas a los países, prohibir el intercambio entre Estados y suspender la transferencia tecnológica. (Lüttecke, 2004, p. 3)

Este primer momento del concepto de seguridad en el escenario internacional contribuyó a la consolidación ordenada del poder militar, desarrollando en la hegemonía el militarismo y la militarización de los territorios como la materialización de la disciplina castrense y el desenvolvimiento de toda una ideología al servicio estructuralista de la represión y la violencia institucionalizada.

En América Latina, el militarismo se ha introducido a partir de la intervención de Estados Unidos por medio de políticas como el Plan Colombia, el Comando Sur, La IV Flota, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Mérida (Ortega, 2010). En respuesta a la dinámica de militarización, ha incrementado el fenómeno del gasto militar sobre ciertos países de América Latina que han visto en el principio de seguridad nacional un elemento esencial para la consecución de sus programas de gobierno. La evolución del concepto de seguridad ha tenido sus variables, motivo por el cual, a partir de la Carta de las Naciones Unidas se amplió el significado con base en el artículo 55. Este reza:

[...] con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. (ONU, 2016)

A partir de este artículo, la ONU resalta la *seguridad humana*, expresada en la estabilidad de los países en condiciones de igualdad incentivando un ejercicio pacífico en las relaciones de los distintos países. En este marco, el principio de seguridad concebido no desde una estructura de defensa y guerra, sino de bienestar, genera una álgida brecha en los intereses de la política mundial, motivando la profundización de los conflictos con base en los pilares económicos. De este modo se pone como mayor nivel de importancia la vida, haciendo del sentido humano un pilar fundamental para las relaciones internacionales, en el que la cooperación internacional se posiciona como factor protagónico en el marco de la seguridad.

Así pues, el sentido humano se contrapone sobre el sentido nacional. Como es de resaltarse, en 1994, a partir del Informe Anual de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se habló de la necesidad de un nuevo modelo de seguridad que ha sido el principio prevalente en el proceso de la globalización, denominado seguridad humana.

Tal como lo definen las Naciones Unidas “La seguridad humana es un marco normativo dinámico y práctico para hacer frente a las amenazas de carácter intersectorial y generalizado con que se enfrentan los gobiernos y las personas” (UN, 2016). Con todo y esto, el sentido de la seguridad continúa trabajando en la misma línea y con el mismo objetivo: mantener la estabilidad de la estructura que configura el sistema político, lo que implica el mantenimiento prevalente de los intereses económicos y su inserción en los países aun cuando tenga un enfoque objetivo o subjetivo de la realidad. Por este motivo, es importante tener en cuenta las amenazas de la seguridad humana con base en las consecuencias habituales que se desencadenen en los países tabla 1.

Tabla 1. Tipos de seguridad humana, características, amenazas.

Tipos de seguridad humana	Características	Amenazas/Indicadores
Seguridad económica	Disponibilidad de ingresos básicos, procedentes del trabajo, el Estado o del ámbito de la familia o comunidad.	Aumento del desempleo, reducción de los salarios reales, aumento de la inflación, pérdida de los bienes productivos, aumento de disparidad de ingresos entre ricos y pobres.
Seguridad alimentaria	Disponibilidad de alimentos y de recursos con los que acceder a ellos.	Deterioro del consumo, agotamiento de las reservas alimentarias, aumento de los precios de alimentos, y aumento de la dependencia de importaciones.
Seguridad en salud	Cuerpo sano, entorno en condiciones de salubridad, cobertura del sistema sanitario.	Aumento de insalubridad, propagación de epidemias, deterioro del sistema sanitario, de acceso al agua potable.

Tipos de seguridad humana	Características	Amenazas/Indicadores
Seguridad medioambiental	Equilibrio ecológico, sostenibilidad del desarrollo.	Deterioro de los ecosistemas local y mundial, agotamiento de los recursos.
Seguridad personal	Ausencia de violencia física.	Incremento de diferentes tipos de violencia física (represión política, agresiones extranjeras, conflictos étnicos o religiosos, delincuencia, malos tratos a mujeres y niños), narcotráfico, etc.
Seguridad política	Respeto a los derechos fundamentales del individuo, garantías democráticas.	Incremento de la represión política, violaciones de derechos humanos y autoritarismo; desintegración del Estado nación por rivalidades.

Fuente: HEGOA y PNUD (2006)

Conforme la tabla 1, el desarrollo de cada uno de los tipos de seguridad humana trae como consecuencia se interpongan al bienestar y la estabilidad personales. En el escenario de la seguridad humana aparece la paz como un concepto que ha evolucionado a medida que las disputas internacionales han determinado la necesidad de concebir la paz como un derrotero para el conflicto.

Con base en lo anterior, la paz se ha concebido como un factor relacionado con el desarme, el conflicto y el desarrollo, motivo por el cual el vano concepto de paz como ausencia de guerra se traslada al momento coyuntural que abordan los países de acuerdo con su proceso histórico. Por lo tanto, se han desarrollado imaginarios alrededor de la paz donde se concibe que “la paz supone ‘suprimir’ los conflictos de cualquier índole, cuya existencia es prácticamente inevitable en todo acto de interrelación humana. Pero estos no son necesariamente obstaculizadores ni disfuncionales para la sociedad, sino que pueden convertirse en motores de su desarrollo” (s. a., 1997).

De acuerdo con esta premisa es que han trabajado los países que han implementado procesos de paz con el fin de combatir el armamentismo mediante el desarme en miras al desarrollo de estos. Una muestra de ello se esclarece en los procesos de paz realizados en Colombia

donde a partir de diálogos se han logrado acuerdos para decisiones y transformaciones importantes del país, aspecto que ha implicado el desarme, pero ha mantenido la profunda estructura de desigualdad que conserva el conflicto social, político y económico sobre las realidades colombianas.

Desde finales de la segunda guerra mundial, en distintos centros e institutos de Investigación, se están desarrollando teorías sobre y para la paz (quizá sea más adecuado referirse a las paces, dada la inobjetable polisemia del concepto) que la vinculan a la cesación de las violencias o, de manera más amplia, a la solución pacífica de los conflictos. (López, 2011, p. 85)

Como consecuencia de lo anterior, los teóricos se han encargado de darle a la paz una clasificación que logre diferenciar sus matices conforme sea aplicado en los distintos contextos. Se tiene en primer lugar la *paz negativa*, en la cual, como lo dispone Bautista:

[...] la paz como una unidad interior frente a una amenaza exterior [...] [donde] los aparatos militares aparecen como una necesidad de defensa y conquista de la paz y tiene sus expresiones en el desarrollo del militarismo y el armamentismo (nivel nacional), y del imperialismo, expansión colonial y política de pactos y alianzas contra amenazas enemigas (nivel internacional). (Jimenez, 2009, p. 147)

Por otro lado, se concibe la paz positiva que implica unos factores culturales más marcados en su manifestación hacia la sociedad, de modo que:

[...] se enmarca en el concepto de violencia estructural. Fue Galtung, en 1960, quien introdujo la noción de violencia estructural. Según este autor, mientras existan injusticias y no se atiendan las necesidades humanas básicas (bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia) [...], no existirá la paz aunque no nos agredamos directamente.” (Galtung, 1985). De acuerdo con este enfoque, el concepto de paz se amplía hacia nuevas consideraciones y campos, tales como la construcción de la justicia social y el desarrollo para que todos los seres humanos puedan atender sus necesidades, los movimientos sociales por los derechos humanos,

las reivindicaciones feministas, las manifestaciones en contra de la guerra. (Montañés y Ramos, 2012, p. 243)

De acuerdo con esta concepción positiva de la paz, se le atribuye un papel importante a la sociedad civil, la cual mediante el movimiento social y las reivindicaciones por los derechos humanos participa en la construcción permanente de la paz desde la superación de las dinámicas de la violencia institucionalizada en el conflicto social. En concordancia, se visibiliza la forma en la cual la seguridad y la paz se encuentran participando conjuntamente en los programas decisivos de los gobiernos para el cumplimiento de las disposiciones internacionales y para la dinámica activa de la sociedad en medio de los intereses perpetrados y controlados por la estructura represiva de la guerra. Sobre ese acápite, la ONU se ha encargado de instaurar la Seguridad de la Paz comportando uno de sus principios rectores estableciendo desde su discurso, la posibilidad de encontrar solución a problemas mundiales que puedan resolver conflictos internos.

Los asuntos militares en el contexto colombiano

La historia colombiana ha estado permanentemente acompañada por conflictos en los que la institución militar ha tenido muy claro su rol en el marco de la defensa de los intereses del poder. Es importante recordar el papel que desempeñaban los guerreros en la colonia que como agentes colonizadores se valieron de las estrategias de guerra para impedir las expresiones de resistencia por parte de los indígenas, lo que los llevó a afianzar los mecanismos de represión sobre las comunidades. Así pues, desde la colonización española se consolidó en la Nueva Granada una estructura clara del poder militar que se ha conservado como un elemento cultural y hegemónico de gran relevancia.

En efecto, como tendencia en toda América Latina existe una fijación por parte de las potencias de ejercer un control territorial sobre los países para, de esta manera, explotar con mayor libertad recursos naturales, mano de obra y servicios. Para lograrlo, las grandes potencias

se han valido de su poder para imponerlo sobre los países, concepción sobre la cual:

Tras el fin de la guerra fría y un largo periodo de consolidación del modelo neoliberal alrededor del mundo, América Latina se ha venido convirtiendo en un territorio donde se reflejan las mayores contradicciones de este modelo. Una mezcla entre desarrollo económico y expansión comercial, por un lado y desigualdad social y altos niveles de violencia, por el otro, muestran una mayor complejidad de análisis. (Ortega, 2010, p. 7)

De esta manera, desarrollar el tema de la militarización en América Latina permite entender su historia basada en la introducción del modelo neoliberal y la comprensión de las condiciones políticas y sociales como producto de la política de seguridad instaurada en los países. Por tal motivo, la intervención de Estados Unidos en los países de América Latina por medio de la doctrina de seguridad nacional ha tenido sus matices. En el caso concreto colombiano, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se configuraron como los motivos para emprender un programa que logre combatir las problemáticas desde una concepción de seguridad, iniciativa que se materializó en Colombia con el denominado Plan Colombia.

Colombia es uno de los países que más dinero recibe de Estados Unidos para proyectos militares o de seguridad. En este aspecto, es el país que destaca como el más fuerte aliado de los EE.UU. en Sudamérica. De hecho, Colombia es el único país del continente que apoyó la invasión de las tropas norteamericanas y aliadas en Irak y Afganistán. Desde principios del siglo XX los diferentes gobiernos de Colombia han acatado las políticas de EE.UU. leales a la vieja doctrina Monroe de “una América para los americanos”, desde la trágica Doctrina de Seguridad Nacional, hasta el actual Plan Colombia. (Ortega, 2010, p. 10)

En el marco de las fallidas mesas de negociación con las FARC emprendidas en San Vicente del Caguán en 1999, la dinámica del país se circunscribe a la influencia estadounidense atendiendo a la formación militar y consolidando bases militares en aras de defensa y seguridad

nacional. Durante el periodo del Plan Colombia, si bien hubo una inyección de capital por parte de Estados Unidos, el gasto militar desde el presupuesto nacional incrementó desfasadamente. Como bien lo manifiesta el Ministerio de Defensa, “en Colombia el Gasto Militar comprende no solo el gasto propio de la defensa del territorio colombiano en contra de amenazas externas, sino que incluye también el gasto necesario para preservar la seguridad nacional” (Mindefensa, 2011).

Con base en el porcentaje del PIB que durante el Plan Colombia se ha destinado para el gasto militar, el Ministerio de Defensa ha realizado un comparativo con los demás países latinoamericanos (tabla 2):

Tabla 2. Posición de países latinoamericanos en gasto militar

Posición	País	Máx.	Mín.	Promedio
1	Colombia	4,5	3,2	3,9
2	Chile	3,8	3,4	3,6
3	Ecuador	3,0	1,7	2,2
4	Bolivia	2,1	1,4	1,8
5	Brasil	1,9	1,4	1,6
6	Uruguay	1,8	1,3	1,6
7	Perú	1,7	1,3	1,5
8	Venezuela	1,5	1,2	1,3
9	Argentina	1,4	0,8	1,2
10	Paraguay	1,3	0,8	1,0
11	Nicaragua	0,9	0,7	0,7
12	El Salvador	0,9	0,6	0,7
13	R. Dominicana	1,0	0,4	0,6
14	Guatemala	0,9	0,3	0,6
15	México	0,6	0,4	0,5

Fuente: Mindefensa (2009).

Como se puede apreciar, en el periodo indicado Colombia ocupaba el primer lugar en gasto militar, aspecto que se mantuvo por varios años y que se vio vagamente disminuido con el actual proceso de paz, con el que se espera una reconfiguración de la inversión hacia el mantenimiento de la paz que logre desarrollar los programas discutidos en la mesa de negociación entre el Gobierno nacional y las FARC-EP.

Si bien el gasto militar se ha referido desde el Ministerio de Defensa, como la herramienta para llevar a cabo la seguridad del país, cabe resaltar que la comprensión del término desde la institucionalidad está totalmente desligada del valor y el sentido de lo humano que en el trascurso de los años ha dejado miles de víctimas de los derechos humanos, permaneciendo como sistemática la persecución a líderes sociales y personas del escenario urbano y rural. De acuerdo con este término, según las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, la cantidad de víctimas desde la vigencia del Plan Colombia es la siguiente (figura 1).

En la figura 1 se aprecia el número de víctimas si bien ha ido disminuyendo, se mantiene en cifras que perturban el imaginario de paz de un país como Colombia. Entre las formas de violación a los derechos humanos se encuentran homicidios, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc.; de manera que entre los asuntos militares ha habido una participación por parte de las Fuerzas Militares en la consecución de muchas de estas manifestaciones de violencia que a la luz del Derecho Internacional Humanitario se ha dejado al Estado colombiano como un país infractor en crímenes de lesa humanidad.

Figura 1. Víctimas registradas por año de victimización entre 2000 y 2015

Fuente: Unidad de Víctimas (2015).

En relación con los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel protagónico con respecto a la responsabilidad de violaciones a los derechos humanos; los errores militares y las ejecuciones extrajudiciales, sobre todo estas últimas, lo que motivó el ejercicio de condenar al Estado colombiano por su ejercicio permisivo ante las políticas de seguridad adoptadas por las Fuerzas Armadas. Por este motivo, el informe de 2015 dispuso:

ACNUDH-Colombia documentó violaciones al derecho a la vida que el Ejército continúa calificando como “errores militares”. El 4 de marzo, en Las Bancas de Arauquita (Arauca), un joven agricultor fue asesinado en una operación militar llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Quirón. El 1 de mayo, en Villa Fátima, Anorí (Antioquia), soldados del Batallón Bomboná mataron a un agricultor e hirieron a otro. (ACNUDH, 2015)

De igual forma expresó:

[...] documentó otros casos en que las fuerzas armadas intentaron mostrar a víctimas de ejecuciones arbitrarias como bajas enemigas en combate o reorganizaron la escena de los hechos para simular legítima defensa. Por ejemplo, el 23 de febrero en San Pablo (Bolívar), un hombre fue muerto a tiros por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. (ACNUDH, 2015)

Se puede entender entonces, que durante el proceso de paz de la administración Santos los asuntos militares han mantenido su tendencia mediante la práctica continuada de ejecuciones extrajudiciales que si bien fueron disminuidas en términos de cifras, no ha disminuido el carácter de responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas sobre las actuales violaciones de Derechos Humanos que desde las Naciones Unidas se manifiestan como una preocupación ante la dinámica de paz que está desarrollando el país.

La figura 2 resalta el número de víctimas por homicidio donde los presuntos responsables son los miembros del Ejército Nacional, que por cada año ha sido totalmente irregular. El punto más álgido se identifica en 2007 como producto de un incremento aleatorio desde 2002, tiempo crucial de la consecución del Plan Colombia. Posterior a este año, se presenta una notable disminución de la cantidad de las víctimas, donde los asuntos militares por parte de la Fuerza Pública hicieron del reconocimiento de derechos para las víctimas del conflicto en los últimos años, una política de seguridad de la paz materializada en herramientas como la Justicia Transicional pese a que se conservaron prácticas que para el 2011 dejaron 52 víctimas, con base en los datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación y corroborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Figura 2. Número de víctimas en investigaciones por homicidio con presunto responsable miembros del Ejército. Periodo 2002-2011

Fuente: Fiscalía General de la Nación (2014).

La objeción de conciencia en el marco de la Seguridad de Paz en Colombia

Con base en las temáticas desarrolladas en los acápite anteriores, en términos de políticas de seguridad nacional se incrementó, a su vez, la necesidad de enlistar jóvenes en las filas de las Fuerzas Militares por medio de la prestación del servicio militar obligatorio regulado por la Ley 48 de 1993. De esta manera, los asuntos militares han tenido una marcada fijación por el reclutamiento de menores, aún con herramientas no permitidas por el ordenamiento jurídico colombiano, como, por ejemplo, las comúnmente llamadas “batidas ilegales” que consisten en la aprehensión del joven en un camión del Ejército para definir su situación militar sin una citación previa, violando su libertad de locomoción, a lo que la Corte Constitucional denominó detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento.

En los últimos años, el ordenamiento jurídico colombiano se ha visto involucrado en la necesidad de estudiar la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, basado en los análisis que centros de

pensamiento, grupos de investigación, organizaciones sociales y población civil han realizado sobre la militarización, su incidencia en escenarios de conflicto armado y su adaptación jurídica en los territorios, tomando como elemento la prestación obligatoria del servicio militar por parte de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad.

Según informes, la militarización es un proceso vinculado al ejercicio mercantil de comercialización de armas en la que se ve afectada la vida y el entorno; de igual forma, existen datos y estadísticas que resaltan la desigualdad en el comparativo establecido entre la inversión a la carrera armamentista y el acceso de numerosa población a los derechos fundamentales conectados a la vida como lo son la salud, la vivienda, la educación, el medio ambiente sano, el agua; donde la defensa de la vida se ha tornado obstaculizada. (Red de desmilitarización y Construcción de Poder Alternativo y Red de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, s. f.).

De acuerdo con lo anterior, la prestación del servicio militar obligatorio regulada por la Ley 48 de 1993, “por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización”, ha sido objeto de debate, puesto que se ha demandado la inconstitucionalidad de algunos apartes consagrados en la ley, conllevando así a lo que se ha presentado ante la opinión pública como la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, puesto que se ha revelado un problema estructural, en el cual, como lo afirman expertos, los jóvenes más pobres que tienen dificultades para pagar la libreta militar con bajos incentivos para querer prestar su servicio se ven inmersos en las cuotas de reclutamiento exigidas por el Gobierno al Ejército anualmente, teniendo en cuenta las múltiples interpretaciones sobre la legislación y jurisprudencia relacionadas con esta problemática (Herrera, 2014).

Corroborando la teoría de Herrera, en la tabla 3 se puede apreciar que los jóvenes correspondientes a los estratos 0,1 y 2 son los que en el gran grueso ponen sus cuerpos a disposición de la guerra, mostrando un sentido de clase por parte del modelo colombiano. De este modo, la Corte Constitucional, dando un grado de reconocimiento a la problemática estructural expuesta y teniendo en cuenta el principio constitucional a la libertad de conciencia implicada en el contexto del servicio militar obligatorio, determinó en la Sentencia C-728 de 2009

que el derecho a la objeción de conciencia además de estar supeditado a la libertad de conciencia, se encuentra avalado en la libertad de religión y culto y, por lo tanto, no necesita de una reglamentación específica, pues puede ser protegida por medio de tutela.

Tabla 3. Estratos correspondientes a jóvenes reclutados

Estrato	Porcentaje		
	SOLDADOS BACHILLERES	SOLDADOS REGULARES	SOLDADOS CAMPESINOS
0	10,28 %	1,8 %	16,42 %
1	16,82 %	21,22 %	14,7 %
2	55,03 %	60,44 %	50,48 %
3	17,11 %	15,32 %	18,1 %
4	0,7 %	1,15 %	0,3 %
5	0,04 %	0,01 %	
6	0,02 %	0,06 %	

Fuente: Defensoría del Pueblo (2013).

Desde un punto de vista un nivel teórico, es importante indagar sobre el significado de conciencia y partir de la idea de que es uno de los elementos más debatidos para poder reconocer el derecho a los jóvenes declarados objetores. En consecuencia, la conciencia es definida por el profesor Mario Madrid Malo como “un juicio de la racionalidad práctica sobre la moralidad de la acción, como un dictamen del entendimiento sobre la connaturalidad de un acto con el bien, como la puesta en práctica de la sensibilidad moral” (Casas, 2010, p. 4). Con base en el concepto, la conciencia parte de un proceso personal en que se materializa la moral y las convicciones desde un ejercicio racional, significado que ha implicado el elemento primordial en la historia del reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

En relación con lo anterior, el profesor determina que se torna como “la posibilidad que tiene toda persona de *no hacer* algo que

atenta contra sus convicciones, es decir, es una forma de desobediencia a una ley específica o cuando una persona hace insumisión ante el sistema mismo” (Casas, 2010, p. 5). Este fenómeno se contempla en la situación colombiana, donde aún con la obligatoriedad de una ley sobre el proceso que debe llevar un joven al cumplir su mayoría de edad sobre su servicio a la patria mediante el uso de las armas en el alistamiento militar, la conciencia interviene evitando realizar algo que va en contra de las convicciones a través de la desobediencia.

Partiendo de esta premisa, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en su totalidad, “es definida como la negativa de una persona a realizar actos, acciones o participar dentro de cualquier estructura militar, sea de manera directa (haciendo parte de ella) o indirecta (financiándola), argumentando convicciones morales, religiosas, éticas, humanitarias o políticas” (Casas, 2010, p. 5).

De acuerdo con los presupuestos teóricos que envuelven el tema propuesto, se tiene que hay unos postulados desde el análisis del ejercicio armamentista sobre las directrices de control político y social. De esta manera, Karl Loewenstein realiza una distinción entre el poder político y el poder social (Casas, 2010), a partir de su estrecha relación con los dominados, desde órdenes de estricto cumplimiento que legitimen el poder impuesto. En este sentido, se tiene que a partir del poder político que implica un poder social en términos de control, un elemento indispensable es la actividad militarista como herramienta para mantener el orden.

Por lo tanto, el ejercicio militarista desarrollado en Europa y alrededor del mundo, toma su base en los ejércitos trascendentes para obtener resultados particulares sobre territorios determinados, tal como se dio con el ejército franquista en España (Ordás, 2012). De este modo, las ideologías marcadas por el nacionalsocialismo instalaron en el panorama social una disciplina militar que significó la obligación de mantenerla como un elemento indispensable en la educación y el servicio a la patria, formando parte de escenarios en guerra.

Ante esta dinámica, extendida en las lógicas de todos los países para el control del territorio y el mantenimiento de la hegemonía, se tornó necesario postular las discusiones sobre los derechos fundamentales en el escenario castrense de acuerdo con las disposiciones consagradas en

la legislación y su relativa contradicción con los derechos y los principios constitucionales. Por ende, teóricos han desarrollado múltiples discusiones y reflexiones en torno a un principio fundamental en el marco de la disciplina militarista, correspondiente a la libertad de conciencia. Como lo dispone Casas, “el mero concepto de Conciencia ya implica un debate amplio que además de lo político se cruza por lo religioso; es pues una discusión que soslaya lo más subjetivo e íntimo del ser humano” (Casas, 2010, p. 4).

Desde una perspectiva teórica, el derecho a la libertad de conciencia tiene su origen en las expresiones humanas y parte de la premisa de que el ser humano es consciente, racional, libre, que puede discernir sobre su obrar y puede actuar de acuerdo con sus dictámenes personales; de ahí que los Estados constitucionales contemporáneos alardeados por la defensa de la dignidad humana tengan el deber ético y político de velar por la garantía de este derecho (Ordás, 2012, p. 12).

En este sentido, se justifica en la teoría las transformaciones que en la dinámica social han implicado un carácter de exigencia sobre el sentido obligatorio del servicio militar, pues existen precedentes históricos, políticos, sociales y culturales que definen la necesidad de readecuar de una manera incluyente el fenómeno planteado. Por lo tanto, la objeción de conciencia traspasa los límites establecidos por la legislación colombiana, y en un ejercicio constitucional se extiende un abanico de argumentos de análisis ante los asuntos militares en un país tan golpeado por el conflicto armado como lo es Colombia.

Justo en este punto se enlaza el término de objeción de conciencia ante asuntos militares con la seguridad de la paz, pues gracias a la influencia de Naciones Unidas se concibe la paz como un elemento que procura por las libertades humanas en condiciones de dignidad. De este modo, el proceso de negociaciones culminado en este momento del año, implica interpretaciones en cuanto a la concesión de derechos que han prevalecido en el limbo jurídico. La prestación del servicio militar obligatorio se presenta como una imposición militarista dedicada al deber de todo hombre de prestar servicio a su patria una vez cumpla la mayoría de edad, teniendo en cuenta la necesidad de combatir el terrorismo y proteger la seguridad nacional. No obstante, en relación con proceso de desarme de las FARC-EP se instalan nuevas

perspectivas con respecto a la construcción de paz en el país, iniciando por las medidas obligatorias que se sobreponen a los pensamientos, las convicciones y los postulados de vida de los jóvenes que ven en la estructura militar un aparato que alimenta la guerra y que reproduce manifestaciones de violencia sobre personas inocentes.

Si el joven se desenvuelve en un territorio que participa en la construcción de la paz, no tiene por qué ver su deber con su patria en el uso de las armas, pues desde un ejercicio social, cultural y comunitario puede llevar a cabo su obligación de participar en la transformación del país en un marco de seguridad humana, colectiva y en paz. Por lo tanto, el mantenimiento de la paz como factor primordial para los retos que se presentan en el Estado colombiano hace del proceso de construcción la posibilidad de descartar que está todo dicho y diseñado por los teóricos, académicos, constitucionalistas y sujetos protagónicos en el marco de los acuerdos, pues la participación concreta de todos los sectores del país deben aportar sus saberes, conocimientos y experiencias para un verdadero ejercicio político de construcción de paz y las garantías para mantenerla.

Conclusiones

El concepto de seguridad ha tenido una gran evolución en la historia mundial y ha sido modificado de acuerdo con los intereses sociales, políticos y culturales marcados en el orden internacional, motivo por el cual, hoy por hoy se puede diferenciar entre la seguridad nacional, la seguridad humana y la seguridad de paz.

De igual forma, el concepto de paz ha sido desarrollado por los teóricos que han logrado entre las apreciaciones más importantes dos acepciones: la paz positiva y la paz negativa, que logra circunscribirse a características propias de cada una como lo son el desarme y el conflicto, o el análisis profundo de la estructura social y la violencia institucionalizada.

Ante los asuntos militares se presentan conceptos como militarismo y militarización, ambos inmersos de manera correlacionada en los países de Latinoamérica y logrando su introducción más marcada mediante el Plan Colombia en nuestro país. Este programa trajo consigo la

agudización de la violencia amparada en la bandera de la lucha contra el terrorismo, aumentando el gasto militar y haciendo de los territorios en conflicto cunas de sangre para líderes y lideresas del escenario rural, desplazamiento forzado y una gran cantidad de víctimas.

Se presenta la objeción de conciencia como una herramienta política y constitucional para la protección de libertades individuales con respecto a asuntos militares, protegiendo la libertad de conciencia y las convicciones que se enmarcan en quienes rechazan la estructura militar como una solución a la guerra y se entiende la relación con la coyuntura nacional que se circunscribe al mantenimiento de la paz desde los retos de construcción.

En suma, se tiene un gran abanico de posibilidades que abren camino a la construcción colectiva de propuestas desde la participación política, haciendo uso preponderante del derecho a la objeción de conciencia en resistencia al afianzamiento de las armas. Se entiende que hay una brecha muy profunda entre los sesgos políticos que se marcan en las distintas tendencias de la opinión pública, pero se parte de un ejercicio objetivo donde la libertad de conciencia guíe el mantenimiento y la construcción de la paz.

Referencias

- ACNUDH (2015). *Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*. New York. Naciones Unidas.
- Casas, J. (2010). Los debates de la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio en un estado militarista. Una mirada crítica a la sentencia C-728 de 2009. *Diálogos de Derecho y Política*, 2-20. Vol. 4. Núm. 2.
- Fernández, J. (2011, nov.). *Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y Fundamentales*. Recuperado el 29 de agosto de 2016, de http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/103
- Herrera, N. (2014, sep.). *Es irregular conducir jóvenes a guarniciones para verificar situación militar: Ejército*. Revista Semana. Recuperado el 26 de febrero de 2015, de <http://www.elspectador.com/noticias/bogota/irregular-conducir-jovenes-guarniciones-verificar-situa-articulo-517399>
- Instituto Español de Estudios Estratégicos. (2011). *La evolución del concepto de Seguridad*. España: Ministerio de Defensa.

- Jiménez, F. (2009). Hacia un paradigma pacífico: la paz neutra. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Número Especial*, 141-190.
- López, M. (2011). Teorías para la paz y perspectivas ambientales del desarrollo como diálogos imperfectos. *Luna Azul*, núm. 33, julio-diciembre, 85-96.
- Lüttecke, J. (2004, p. 3). La seguridad Internacional y su Evolución. *Revista Marina*, 1-14.
- Mindefensa. (2011). *Gasto en Defensa y Seguridad (1998-2011)*. Recuperado de <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Serie%20Prospectiva/Gasto%20en%20defensa%20y%20Seguridad%201998-2011.pdf>
- Montañés, M. y Ramos, E. (2012). La paz transformadora: Una propuesta para la construcción participada de paz y la gestión de conflictos desde la perspectiva sociopráctica. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 7. Núm. 2, 241-269.
- ONU (2016, sep.). *hrlibrary*. Recuperado de <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/spanish/Schapter9.html>
- Ordás, C. (2012). *Dialnet*. Recuperado el 29 de agosto de 2016, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4716542.pdf>
- Ortega, P. G. (2010). *Militarismo en América Latina*. Barcelona: Justicia i Pau.
- Red de desmilitarización y Construcción de Poder Alternativo y Red de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (s. f.). Construyamos cultura de paz. *Campaña del servicio Paz y Justicia en América Latina*, 6.
- s.a. (1997). Educación en la Paz y los Derechos Humanos. *Formación Ética y Ciudadana* (pp. 1-3). Buenos Aires: Currícula.
- UN (2016, sep.). *un.org*. Recuperado de <http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-humana>
- Villota, M. (2012). El control de constitucionalidad a las omisiones legislativas en el contexto del Estado social de derecho. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, vol. 42, Núm, 117, 455-479.